

“La construcción social del riesgo en torno a la fumigaciones como proceso de ambientalización de los conflictos sociales”.

Federico Trombetti.

Facultad de Humanidades y Artes

Universidad Nacional de Rosario

trombefede@gmail.com

Resumen.

En este trabajo, realizado en el marco del Seminario de Contenido Variable, “La temática ambiental en antropología, una introducción a temas y perspectivas de estudio”, de la carrera de antropología, realizaremos una revisión bibliográfica focalizada en analizar la construcción social del riesgo vinculada al modelo de producción agroindustrial en Argentina, caracterizado principalmente por el uso de organismos genéticamente modificados y la aplicación masiva de agrotóxicos. Abordaremos dicha construcción como problemática inmersa en un proceso histórico de pocas décadas donde tiene lugar la invención y consolidación de la temática ambiental como una nueva cuestión social, publica y ligado a ésta, una “ambientalización” de los conflictos sociales.

Desarrollo

Las profundas transformaciones ocurridas en la década de los noventa de la mano de políticas neoliberales en Argentina (y en el Cono sur) adquirieron su especificidad en el ámbito rural. Un modelo de producción y distribución de alimentos orientado hacia el exterior insumo-dependiente, basado en la producción a gran escala, en el desarrollo de monocultivos transgénicos y en una “agricultura sin agricultores”, concentrador pero a la vez excluyente, es el que comenzó a predominar (Dominguez y Sabatino,2010)

Este modelo se consolidaría a partir del año 1996 con la adopción de los denominados O.G.M u Organismos Genéticamente Modificados (soja RR, algodón RR y BT y maíz BT y RR) mediante la aprobación de la comercialización y liberación al ambiente de los mismos desde la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la nación.

La extensión del monocultivo de transgénicos, implica riesgos: a nivel ambiental, se pone en peligro la biodiversidad y se multiplican los casos de contaminación (animal, vegetal y humana); a nivel comercial, el país se convierte en un “monoproducción” atado a los vaivenes del precio internacional de un *comodity*; y a nivel tecnológico se depende del desarrollo de tecnologías que generan las empresas multinacionales que las producen.

Por otro lado, trae como consecuencia la profundización de un nuevo paradigma tecnológico y productivo que los autores mencionados denominan como agricultura industrial o agricultura sin agricultores, ya que las últimas transformaciones en el agro devienen en un proceso de desarticulación de la agricultura familiar consistente en la expulsión masiva de productores agropecuarios, o su transformación en rentistas que no laboran la tierra (Dominguez y Sabatino,2010).

Es así que uno de sus mayores riesgos, es constituido por el impacto en la salud de las comunidades que son afectadas por la contaminación derivada de las fumigaciones. A partir de esta problemática “novedosa” se comienza a construir una percepción del riesgo con características específicas que como argumentaremos, se codifica como un proceso social y una construcción cultural.

Entendiendo la percepción del riesgo a partir de la teoría desarrollada por Mary Douglas (1996) podemos visualizar como la importancia dada por las personas a ciertos riesgos en desmedro de otros no es parte del mero azar, sino que es producto de un proceso sociocultural que tiene que ver con construcciones que se asientan en las instituciones y sirven para reforzar la solidaridad social y los valores que la sociedad enarbola, por lo cual, tal percepción, poco tiene que ver con el carácter objetivo de esos riesgos. De esta manera, los procesos culturales que seleccionan diversos tipos de peligros para la atención funcionan a través de procedimientos institucionales que asignan responsabilidad. La inculpación de la víctima, de sus progenitores, o de quienes se consideran foráneos, son estrategias que la citada autora ha incluido en este tipo de respuestas. Es así que, en torno a las fumigaciones, “cuando hay efectos sobre la salud de las personas, los casos poseen mayores posibilidades de alcanzar conocimiento público y, por lo general, se observa que existen agentes estatales que buscan relativizar o desvirtuar la denuncia de las víctimas. Son escasos o nulos los casos en que las autoridades emprenden investigaciones sobre lo sucedido y cuando lo hacen, por lo general, no se tiene como eje de la cuestión los agrotóxicos, sino que se hace hincapié en otro tipo de factores, que muchas veces implican responsabilidad de las mismas víctimas” (Dominguez y Sabatino, 2010:67).

Argumentaciones vinculadas al sostenimiento de estos modelos productivos, entonces, son usuales en este tipo de respuestas institucionales de asignación de responsabilidades. Bien documenta Iturralde (2014) como, por ejemplo, en el año 2010 en el marco de las Primeras Jornadas de Capacitación en Fitosanitarios organizadas en conjunto por el Departamento de Medio Ambiente de Trenque Lauquen, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Nación, (es decir, dos dependencias estatales nacionales y una local) un ingeniero agrónomo de dicho instituto da apertura al evento con un discurso donde argumenta que la agricultura química es necesaria para *“afrentar el hambre en el mundo”*, subyaciendo de esa manera la idea de que quienes denuncien la contaminación que genera este tipo de cultivos o propongan otro tipo de producción, están en contra de su benevolente finalidad. Ligada a la asignación de culpas, se encuentra en el discurso del ingeniero, toda una justificación argumentativa avalada por su tipo de conocimiento, el conocimiento del “experto”, donde se “atenúan” los posibles efectos y se resaltan los beneficios económicos de su utilización, contribuyendo así a aumentar la aceptación del riesgo y generando una mayor tolerancia a los riesgos percibidos. De la misma manera, el mismo ingeniero afirma que los agroquímicos y con ello, el glifosato, “son productos peligrosos para la salud pero que manejados correctamente el riesgo es cada vez menor”, lo que traería a cuenta nuevamente como el conocimiento experto y la inculcación de las víctimas se mueven en sus planteos centrales, mostrando entonces que quienes causan la contaminación y la intoxicación de las poblaciones serían quienes no tienen ese conocimiento experto, quienes aplican los productos de manera equivocada y no como ellos o los fabricantes de dichos productos, (que también son puestos en una posición “incuestionable”) lo recomiendan.

Esto evidenciaría que para estos “expertos”, lo que está en tensión es el “buen uso” y el “mal uso” de los agrotóxicos y no una agricultura sin agrotóxicos en contraposición a la actual. Lo vemos en la siguiente cita extraída del mismo discurso: *“tenemos que pensar en tecnologías de punta y no en alternativas que de repente pueden ser factibles, pero, a mi modo de ver se nos complica bastante pensar en otra alternativa que no sea en un uso racional, sostenible de los fitosanitarios”*. La concepción difundida va directamente ligada a la aceptación del modelo productivo vigente, calificado como “tecnología de punta”. Eso que “podría” ser factible, pero que desde el primer momento es denominado como algo “alternativo”, es el tipo de agricultura sin agrotóxicos, silenciado desde el comienzo.

El riesgo que produce tal tipo de producción ya es entonces (incluso antes de ser percibido) racionalizado, catalogado, y hasta disminuido por los portadores del “conocimiento experto”, así

como por las autoridades representativas de las instituciones locales, en palabras de Mary Douglas: “los desastres no son completamente imprevistos. Incluso formas de amenaza completamente nuevas, sin haber sido anticipadas, pueden ser etiquetadas y encasilladas en categorías existentes de responsabilidad” (Douglas, 1996:90)

Son parte de las mismas estrategias, los planteos en los cuales se generan contraposiciones “insalvables” entre la fuente de trabajo de las poblaciones afectadas y la salubridad de los trabajadores. Intentando poner “en jaque” cualquier tipo de acción contra el modelo productivo vigente, se argumenta que cuestionar la labor agropecuaria actual conllevaría un riesgo mayor que sería la pérdida del empleo, incentivando así a las poblaciones vecinas de los campos donde se realizan fumigaciones, tanto como a las de donde se almacenan los químicos, a que no problematicen ni estén en contra de ese tipo de producción, ya que teniendo sus puestos de trabajo allí, irían en contra de sus propios trabajos, de sus propios ingresos y de sus propios intereses. Cabe que nos preguntemos entonces si no es esta una manera de poner en nombre de los intereses de las víctimas, los intereses de los victimarios, de quiénes se benefician con las fumigaciones y la forma de producir actual.

Es así que Iturralde(2014) en el marco del mismo trabajo, al entrevistar a un médico del hospital del barrio 30 de Agosto que realizó actividades comunitarias para poner en cuestión las fumigaciones y la agroindustria muestra como los vecinos, la gente aledaña, manifestaba que al realizar dichas actividades : “(...)tenía miedo de perder el trabajo, porque asociaban mi hijo, mi primo, mi nieto, mi papá, mi hermano, ¡el que se te ocurra! trabaja en el campo, y sabes si sacan... ¡y sabes que me lo decían los propios vecinos! (...) la gente dice: ¿sabes que es lo que pasa? Si llevan ASP (refiriéndose a una empresa distribuidora de agrotóxicos y otros insumos para el agro) de acá... mi familia se queda sin trabajo” Nuevamente, vemos como el riesgo y su percepción forman parte de un proceso de construcción sociocultural, asentado principalmente en las instituciones, en el cual los actores recuperan algunos aspectos y minimizan e incluso ignoran otros. La aceptabilidad del riesgo en este tipo de construcciones, como vemos, sería mayor cuando el espacio que genera el trabajo es el mismo que genera el riesgo. Parecería ser que, dependiendo de esa conformación, es un riesgo mayor, o menos aceptable, la pérdida del trabajo que la contaminación por el mismo.

Volviendo a las declaraciones de los ingenieros, observamos cómo estos agentes estatales, que también operan en el ámbito privado en relación a la agroindustria y tienen como labor el asesoramiento de productores rurales en el manejo de procesos biológicos en cultivos, mostrarían, en términos de Leff, que son portadores de lo que él denomina como racionalidad económica (Leff

en Iturralde, 2014), ya que brindan información priorizando la rentabilidad en la producción y dirimen la misma en una relación de costos y beneficios, por ello es que la utilización de agrotóxicos se vuelve, para estos, una “necesidad casi incuestionable”

Las tendencias a la justificación, reparto de culpas, inculpación de las víctimas y aceptación del riesgo se intensifican cuando el conocimiento científico sustenta el supuesto de inocuidad de los agrotóxicos o da por descartado el problema de la contaminación. De esta manera, se revela muy importante la producción de este conocimiento, ya que lo que se conoce o no se conoce, se divulga o no se divulga, o bien las influencias políticas y/o económicas en las investigaciones acerca de las nuevas tecnologías agropecuarias y sus influencias sobre las poblaciones locales cumplen un rol fundamental en dichos procesos. El ámbito de la medicina se halla en un lugar significativo respecto de lo mencionado, ya que los médicos que desarrollan su labor en pueblos ubicados geográficamente en zonas donde predomina la producción agroindustrial están en constante contacto con afectados y van a desempeñar un doble papel: en tanto médicos, dedicarse al cuidado, prevención y cura de afecciones de la salud de sus pacientes y en tanto miembros de una institución, el conocimiento que produzcan y los datos que registren en la misma van a formar parte del proceso sociocultural de construcción del riesgo del que venimos hablando.

Respecto del accionar de estos mismos profesionales así como del Sistema de Salud, varios autores (Iturralde,2014, Dominguez y Sabatino,2010) afirman que existe allí un gran desconocimiento de la problemática ligada a los pueblos afectados por las fumigaciones y ese vacío impacta de manera significativa en las percepciones de los habitantes de estos pueblos, ello podemos verlo en investigaciones y relevamientos de información epidemiológica que muestran que entre otras cuestiones, el Sistema de Salud Publica aun no ha establecido un sistema de relevamiento de datos que sea válido, dando como resultado que las voces de alarma de los equipos de salud como las denuncias de las poblaciones sean excepcionales. En ese mismo sentido, “son escasos o nulos los casos en que las autoridades emprenden investigaciones sobre lo sucedido y cuando lo hacen, por lo general, no se tiene como eje la cuestión de los agrotóxicos, sino que se hace hincapié en otro tipo de factores, que muchas veces implican responsabilidad de las mismas victimas “ (Dominguez y Zabatino,2014:67).

Aun así, el espectro de signos y síntomas que pueden presentarse en los seres humanos ante la exposición de agrotóxicos es muy variado y, en muchos casos, inespecífico, razón por la cual es frecuente que el personal de salud no siempre indague acerca de los antecedentes de intoxicación

aguda (cuyos efectos se manifiestan inmediatamente o en un corto plazo después de la exposición) y mucho menos crónica (es decir, aquella en la que los efectos se expresan después de meses o años de exposición, aun en dosis muy bajas). Esta situación, también genera un déficit de registros que permitan establecer relaciones de casuísticas que favorecerían los análisis de daño a la salud de exposición a agrotóxicos (Verzeñasi:2014)

No obstante ello, a la par de un sector dominante que silencia los efectos de los agrotóxicos sobre la salud de las poblaciones expuestas a las fumigaciones, se comienza a constituir un sector dedicado a la investigación, producción de conocimiento y denuncia de dichas problemáticas incluso desde las mismas instituciones. De esta manera muestra Iturralde (2014) como un médico del barrio 30 de Agosto afirma que aún siendo excepcionales los casos de certificaciones de contaminación de la salud por contacto con agrotóxicos, en el barrio ha habido casos donde se han documentado incluso muertes: *“Por ejemplo mi señora fue doctora también en 30 de Agosto, fue la única, yo no se si habrá otro certificado de defunción como el que firmo ella, dice: “muerto por intoxicación con glifosato”. El caso fue de un tipo, un borrachín, estaba descargando bidones de un camión, se le chorrea glifosato liquido arriba de los brazos, se le quemó la piel, fue al hospital, le pusieron dos pavaditas como a cualquier quemadura; eso fue absorbiendo, a los dos días llego a una internación porque eso no se curaba sino que se hacía más penetrante, se interpreto como una insuficiencia hepática (...) reconstruyendo la historia le puso que fue muerte por glifosato, porque fue el Roundup lo que penetró”* (Medico a cargo de la Secretaria de Salud Comunitaria de la Municipalidad de Trenquélauquen).

En este sentido es significativo el caso del Dr. Damián Verzeñasi de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, quien logra desarrollar desde hace siete años, desde las cátedras de Salud Socioambiental y Practica final, campamentos sanitarios que mediante el relevamiento de datos, reflejan la situación sanitaria de 27 pueblos y ciudades de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires (Pagina12,2016). Estos campamentos se han transformado en una prueba académica-científica sobre las consecuencias del modelo agropecuario, en palabras de su director: *“Hoy, el 100% de las localidades que hemos visitado (...) han quedado todas en el medio de las áreas de producción agroindustrial de elementos transgénicos dependientes de agrotóxicos. En una sociedad, en un territorio en el que los últimos 20 años se ha cambiado la forma de producir y se ha empezado a producir elementos transgénicos, implicando entre otras cosas el incremento del 857% en el uso de este tipo de sustancias tóxicas, nosotros entendemos que no puede soslayarse, no puede minimizarse, ni menospreciarse, el impacto que esta carga química*

extra que se está haciendo de manera novedosa en estos 15 o 20 años tenga sobre la forma de enfermar y morir de la gente”(Verzeñassi,2015)

El peso simbólico que conlleva la documentación de los afectados así como las investigaciones de ese tipo van de la mano con una visibilización de la problemática, una redirección de la culpa, ya no dirigiéndose a las víctimas, sino a quienes se benefician del modelo y en el mismo sentido el apoyo para una nueva percepción del riesgo en torno a las fumigaciones.

De la misma manera la investigación y posterior divulgación de los trabajos de Andrés Carrasco desde el C.O.N.I.C.E.T. en el año 2009 sobre los daños provocados en la salud por el uso de glifosato aplicado en la producción agrícola, principalmente en el monocultivo de soja, forma parte de un importante avance en torno a la denuncia avalada por pruebas científicas respecto de las fumigaciones y sus implicancias en la salud colectiva, que si bien no desarrollaremos aquí, ya que excedería los objetivos del presente trabajo, (pero que bien detalla el Dr. Verzeñassi en Verzeñassi,2014), no podemos dejar de mencionar.

Existe también una diversidad de movimientos de productores, ONGs, técnicos, investigadores, movimientos sociales y comunidades locales que se constituyen como afectadas por el modelo productivo de la agroindustria y han decidido en los últimos años organizarse teniendo como objetivo, entre otros, el corrimiento de la esfera individual de los casos de contaminación de la salud, para sacar a la luz la problemática en la que están inmersos como comunidad. En ese sentido es notable como “los movimientos sociales organizados a partir de las percepciones del daño a la salud que nacen a partir del cambio en el modelo de producción, han sensibilizado a algunos equipos de trabajadores de la salud (incluyendo en este amplio grupo a profesionales asistenciales, investigadores, docentes universitarios, entre otros) al cuestionamiento acerca de estos mecanismos” (Verzeñassi,2014:36,37). En otras palabras, han contribuido a consolidar la problemática como una nueva cuestión social y pública, que en este caso vemos reflejada en el ámbito de la salud.

Dos casos importantes que constatamos y que por la relevancia que han adquirido a nivel nacional no podemos dejar de mencionar son, por un lado, el colectivo “Paren de fumigar”, que funciona como una red y realiza eventos periódicos de denuncias públicas y acciones legales planteando la problemática desde los pueblos que la sufren, congregando estudios, investigaciones y denuncias sobre los padecimientos concretos de los conjuntos sociales y dirigiéndose principalmente a la sociedad civil, a otros afectados y especialmente apelando a la regulación estatal. Y por otro, con muchas similitudes, el grupo “Médicos de pueblos fumigados”, que se organiza formalmente desde

el año 2010 y lleva a cabo un espacio de análisis y reflexión académica y científica sobre el estado sanitario de los pueblos a los que nos venimos refiriendo, planteando generar un espacio desde el que se intercambian experiencias y se brinda contención a los miembros de los equipos de salud afectados.

Esta problemática, la conformación de la percepción del riesgo en torno a las fumigaciones como proceso sociocultural, forma parte de un proceso histórico que comenzó hace pocas décadas cuando el problema de la desigualdad social del capitalismo contemporáneo comenzó a aparecer en clave ambiental. Denominado por autores como Lopes (2006) como una “ambientalización de los conflictos sociales”, plantea la construcción de nuevos fenómenos (aún con sentidos contradictorios) vinculados a un proceso de interiorización del medio ambiente en diferentes facetas de lo público. Generándose así una nueva cuestión social y pública, visible, por ejemplo, en el nuevo lenguaje utilizado en los conflictos sociales como en la institucionalización parcial de la problemática. Elementos que hemos destacado a lo largo de este trabajo.

Dicho proceso, que comienza a conformarse históricamente en la segunda mitad del siglo XX, tiene como uno de sus hitos iniciales la Conferencia sobre el medio ambiente promovida por la O.N.U. en Estocolmo en el año 1972 y sus posteriores repercusiones a nivel mundial. Dándose primeramente en países con grandes desarrollos industriales, accidentes ambientales ampliados y riesgos de una internacionalización de los mismos, es parte de un avance en las reivindicaciones y conquistas ambientales y sociales opuestas a ese proceso, anterior, de destrucción de recursos naturales que se viene acrecentando desde la revolución industrial. Como parte del mismo proceso, se configura también un núcleo empresarial que comienzan a utilizar, conforme a los cambios, un discurso de carácter también ambiental, construyendo una justificación de su producción basada en la apropiación y aplicación de la crítica ambiental al capitalismo, viraje que podríamos interpretar como una justificación a la devastación ambiental que los mismos llevaron y llevan a cabo. En este sentido es que éstos se incluyen dentro del proceso de “ambientalización” y en esto reside, entre otras cosas, lo contradictorio del proceso.

De manera que tanto la racionalidad económica ligada a una crítica ambiental, como los movimientos sociales, las ONGs, las esferas estatales y los “profesionales críticos”, forman parte, aun con intereses que se podrían decir antagónicos y relaciones de poder desiguales, del mismo proceso histórico donde lo ambiental comienza a tomar un papel preponderante.

En este contexto, y a partir de lo expuesto, nos parece importante reflexionar acerca del conocimiento científico y de qué manera este interviene en el proceso de construcción social del

riesgo, ya que tanto en el caso de quienes silencian los efectos del modelo agroindustrial legitimándolo y generando un mayor grado de aceptación del riesgo, como en el caso de quienes lo cuestionan, denuncian sus efectos, reclaman mayor regulación estatal, cambios en el sistema productivo o bien proponen una agricultura diferente, quienes están en las instituciones así como quienes forman parte de grupos sociales organizados por fuera de ellas, tienen como base de legitimidad, documentación, registros y estudios basados en éste tipo de conocimiento. En vistas de ello, consideramos necesario reflexionar también acerca de la dimensión política, no solo de la ciencia, sino también de la tecnología, de quienes investigan, comercializan productos vinculados al modelo, se dedican a su aplicación o denuncian sus consecuencias negativas.

Necesario es también plantearse nuevamente en vistas de ese conocimiento, así como del sistema productivo en su totalidad, interrogantes que consideramos fundamentales y que a nuestro entender conllevan: ¿agricultura para qué y para quienes? En ese sentido es que entendemos que no puede aislarse esta problemática del sistema global en el que está inmersa. Interrogarnos y poner en cuestión el supuesto de objetividad de la ciencia, la racionalidad económica, las nociones de riesgo, la agricultura industrial y los intereses de quienes llevan a cabo dicha empresa es inminente ya que, la salud de las poblaciones, el resguardo de la diversidad biológica y la alimentación de millones de vidas humanas dependen de su transformación.

A modo de cierre

En este trabajo, realizado en términos de revisión bibliográfica, hemos planteado como a partir de las transformaciones ocurridas en la década de los '90 en Argentina de la mano de las políticas neoliberales comenzó a predominar en el agro un modelo de producción y distribución de alimentos concentrador y a la vez excluyente. Generando, entre otros, un gran riesgo para las poblaciones cercanas a la producción: el impacto en la salud de la contaminación derivada de fumigaciones.

A partir de ello, siguiendo la teoría de Mary Douglas (1996) hemos analizado como la percepción del riesgo ante tal situación se codifica como un proceso social y una construcción cultural con características específicas que, por otra parte, lejos de provenir de su objetividad, se asienta en las instituciones y sirve para reforzar los valores que la sociedad enarbola, siendo sus principales mecanismos, la aceptación y relativización del riesgo e inculpação de las víctimas o de sus familiares, cuando no, la negación del problema. Vimos, entre otros casos, como para ello es invocado el conocimiento experto, logrando, a la vez, una justificación de dicho modelo de producción. Por otra parte, al indagar acerca de la producción de conocimiento al respecto, mostramos como según varios autores (Iturralde,2014; Dominguez y Sabatino,2010) en el ámbito

de la medicina existe un gran desconocimiento de la problemática y ese vacío impacta en las percepciones que los habitantes tienen al respecto.

Paralelamente, mostramos como se constituye un sector dedicado a la investigación, producción de conocimiento y denuncia de casos de contaminación, muchas veces también salido del seno de las instituciones que buscan la aceptación del riesgo. Expusimos el caso de los campamentos sanitarios llevados a cabo por las cátedras de Salud Socioambiental y Practica Final de la Facultad de Medicina perteneciente a la Universidad Nacional de Rosario, mencionamos el caso de las investigaciones de Andrés Carrasco desde C.O.N.I.C.E.T, como también el de movimientos sociales organizados pertenecientes a poblaciones afectadas, a saber el colectivo “Paren de fumigar” y Médicos de pueblos fumigados”.

Finalmente, inscribimos este proceso de conformación de la percepción del riesgo en torno a las fumigaciones con agrotóxicos en el marco de una “ambientalización de los conflictos sociales” (Lopes, 2006), es decir, un proceso histórico de corta duración en el cual el problema de la desigualdad del capitalismo contemporáneo aparece en clave ambiental y son construidos nuevos fenómenos vinculados a una interiorización del medio ambiente en diferentes facetas de lo público.

Es necesario considerar que a lo largo del presente trabajo de revisión bibliográfica, se han abierto ciertos interrogantes en los que se podría ahondar en futuras investigaciones, en ese sentido, las preguntas acerca del para qué y el para quiénes del modelo agroindustrial, planteadas anteriormente, se tornan centrales. Por otra parte, consideramos necesario profundizar el conocimiento respecto de la percepción del riesgo de contaminación por agrotóxicos como del modelo mismo que tienen tanto ingenieros agrónomos como productores rurales, pensando también en una relación entre ambas dimensiones del problema. Por otra parte, al respecto de la contraposición planteada entre trabajo y salud en el marco de una racionalidad económica, consideramos necesario indagar acerca de la percepción del riesgo en la perspectiva de trabajadores del agro y por qué no, de sindicatos implicados. Por último, consideramos de suma importancia, la necesidad de reflexionar acerca de cómo construir un conocimiento que ponga en cuestión la aceptación del riesgo y la inculpación de las víctimas como que intente visibilizar otras relaciones de poder alrededor del modelo agroindustrial.

Referencias bibliográficas

AUYERO, J Y D. SWISTUN. 2008. Introduccion , en Inflamable.Estudio del sufrimiento ambiental.Paidos, Buenos Aires.

DIEZ, C. 2011. El ojo en el veneno: La ambientalizacion de los conflictos en la produccion agropecuaria en Misiones, en Actas X Congreso Argentino de Antropologia Social, Buenos Aires.

DOMINGUEZ, DIEGO IGNACIO Y SABATINO, PABLO, 2010. “La muerte que viene con el viento.La problemática de la contaminación por efecto de la agricultura transgénica en Argentina y Paraguay”,en “Los señores de la soja : la agricultura transgénica en América Latina”, Ana Lucía Bravo,1a ed. Fundación Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad (CICCUS); Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

DOUGLAS, M 1996. Prologo y Capitulo 5 Riesgos naturales, en La aceptabilidad del riesgo en las ciencias sociales. Paidos, Buenos Aires.

ITURRALDE, R. 2014. La construcción social del riesgo y el conocimiento científico: un estudio de caso sobre un conflicto socioambiental en 30 de agosto, provincia de Buenos Aires, en Cuadernos de Antropologia Social, 12 (175-189)

LEITE LOPES, J.S. 2006. Sobre procesos de ambientalizaçao dos conflitos e sobre dilemas de participaçao, en Horizontes Antropológicos, 12, 25 (31-64)

MILESI, A. 2008. Darse cuenta : la construcción social del riesgo en un barrio de la ciudad de Cordoba, en Estudios de Antropologia Social, Vol. 1, N* 1 CAS-IDES (109-127)

PAGINA12.”6 de noviembre de 2016. “Antes que nada los intereses en juego”.Recuperado de: <https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-57337-2016-11-06.html>

RNMA.7 de mayo de 2015.”Damián Verzeñassi y la experiencia de los campamentos sanitarios”. Recuperado de: <http://www.rnma.org.ar/noticias/18-nacionales/2505-damian-verzenassi-y-la-experiencia-de-los-campamentos-sanitarios>

VERZEÑASSI, D. 2014 “Agroindustria, salud y soberanía.El modelo agrosojero y su impacto en nuestras vidas” en “La Patria sojera.El modelo agrosojero en el Cono Sur”, Daiana Melon.1ª Ed. Editorial El colectivo, Buenos Aires.

